



PLAN ANUAL DE FISCALIZACIONES 2018

Informe sobre la situación económico-financiera de las entidades del sector público de la Comunidad en 2016

- **El gasto presupuestario ejecutado ascendió a 9.981 millones de euros en 2016, un 6% más que en 2013. En este periodo las obligaciones por operaciones financieras, 889 millones en 2016, crecen un 75%, superando desde 2014 a las operaciones de capital**
- **La carga financiera (gastos financieros y amortizaciones en relación a ingresos corrientes) aumenta cinco puntos en el periodo y registra un 14% en 2016 después de alcanzar su valor máximo en 2015**
- **El margen derivado de la actividad corriente es estructuralmente insuficiente para atender las obligaciones exigibles de la carga de la deuda, así como para destinar recursos a financiar inversiones**

El Consejo de Cuentas ha hecho entrega hoy en las Cortes regionales del “Informe acerca de la actividad y situación económico-financiera de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2016, de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública”, tras ser aprobado en sesión plenaria.

El objetivo general de este trabajo, correspondiente al Plan Anual de Fiscalizaciones 2018, está orientado a realizar un análisis de la situación económico-financiera de la Comunidad, observar su evolución en el periodo 2013 a 2016, identificar los indicadores más relevantes, vigilar su comportamiento, así como alertar a los entes fiscalizados de las desviaciones más significativas detectadas en ellos.

El ámbito de la fiscalización está referido a las entidades incluidas en la Cuenta General de la Comunidad. En cuanto a las Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid, aunque ya no son objeto de agregación o consolidación en la Cuenta General de 2016, se han añadido a efectos del análisis efectuado en el informe.

Magnitudes e indicadores presupuestarios. Los gastos presupuestarios ejecutados han aumentado un 6% en el periodo, ascendiendo a 9.981 millones de euros en 2016, si bien se han reducido un 3% respecto a 2015. En concreto, durante el periodo analizado los gastos corrientes en bienes y servicios suben un 10%, los de transferencias corrientes un 9% y los de personal un 4%. La ejecución derivada de operaciones de capital conlleva una caída de un 25% de las obligaciones reconocidas. Por último, las obligaciones por operaciones financieras experimentan un incremento de un 75%, ascendiendo en 2016 a 889 millones de euros -su importe máximo se alcanzó en 2015-, superando desde 2014 a los gastos por operaciones de capital.



El índice de modificaciones presupuestarias ha descendido hasta el 5% en 2016, igualando el valor existente en 2013. El grado de ejecución de la totalidad de gastos en 2016 se sitúa en el 95%, mayor que los niveles registrados en ejercicios anteriores, mientras que el de realización de pagos se sitúa en el 97%.

Con relación a los ingresos, su ejecución en 2016 asciende a 9.898 millones de euros, mayor en un 4% a la de 2013, si bien su mayor cuantía se alcanzó en 2015. Los ingresos corrientes aumentan un 5% -las transferencias registran el mayor incremento y también aumentan los ingresos impositivos- y los procedentes de operaciones de capital disminuyen un 36%, sobre todo en concepto de transferencias. Por último, los ingresos por operaciones financieras se incrementan un 10%, alcanzando los 1.292 millones en 2016, aunque su cifra más elevada se registró en 2015. El grado de ejecución de la totalidad de ingresos se sitúa en el 94% en 2016, 3 puntos inferior al valor de 2015, mientras que el de realización de cobros asciende al 97%.

La autonomía en el ámbito presupuestario se ha estabilizado en el periodo analizado y también lo ha hecho la necesidad de recurrir a las operaciones financieras, ya que las transferencias recibidas, las corrientes, no así las de capital, se han incrementado y los ingresos tributarios permanecen en valores similares.

Los indicadores relacionados con los niveles de servicios prestados ponen de manifiesto que la proporción de gastos corrientes, que en términos absolutos han aumentado un 6%, se sitúa en 2016 en el 83% de las obligaciones reconocidas, mismo valor que en 2013. La evolución de los principales componentes del gasto corriente y su peso en la ejecución del presupuesto ha permanecido relativamente estable con ligeras variaciones. Por otra parte, el esfuerzo inversor ha experimentado una tendencia desfavorable, ya que su indicador disminuye de un 12% en 2013 a un 8% en 2016. La tendencia de la carga financiera de la deuda (gastos financieros y amortizaciones en relación a ingresos corrientes) es creciente, pasando de un 9% en 2013 a un 14% en 2016, lo que provoca un impacto más negativo sobre los ingresos corrientes, necesarios para atender el funcionamiento de los servicios. No obstante el indicador alcanzó sus valores máximos en 2014 y 2015.

El margen de funcionamiento (mide la capacidad para generar recursos de las operaciones corrientes sin considerar las transferencias) presenta un importe estructuralmente negativo, ascendiendo a -324 millones de euros en 2016, experimentando además una tendencia desfavorable en el periodo. Si en este margen se tiene en cuenta el impacto neto de las transferencias corrientes, se constata que el ahorro bruto (diferencia entre derechos y obligaciones de operaciones corrientes) muestra también una tendencia desfavorable ya que su importe se ha reducido al pasar de 136 millones en 2013 a 71 millones en 2016. Su comportamiento es variable, puesto que en 2014 fue negativo y en 2015 aún más, corrigiéndose su signo en 2016 para volver a alcanzar valores positivos.

Si al ahorro bruto se deduce la amortización de la deuda, el ahorro neto obtenido muestra una tendencia desfavorable y resulta negativo por importe de -811 millones de euros en 2016, habiendo aumentado un 197% con respecto a 2013. Por lo tanto, el margen derivado de la actividad corriente es estructuralmente insuficiente para atender las obligaciones exigibles derivadas de la carga de la deuda, así como para destinar



recursos a financiar gastos de operaciones de inversión. Las necesidades de financiación ascienden en 2016 a 485 millones de euros, si bien han disminuido un 10% con respecto a las existentes en 2013. Esta magnitud es estructuralmente negativa en el periodo analizado, alcanzando su importe mínimo en 2015.

Los indicadores obtenidos en relación al número de habitantes de la Comunidad ratifican lo reflejado en las conclusiones anteriores, con un incremento de la presión fiscal, que se sitúa en 2.223 euros por habitante en el ejercicio 2016.

Magnitudes e indicadores financieros del balance de situación agregado. Se experimenta una disminución significativa del patrimonio neto, cuyo importe desciende un 51% con respecto al 2013, situándose en 2.285 millones de euros en 2016. Esta tendencia se ve acompañada de un aumento del pasivo exigible que se incrementa en 2.915 millones, lo que supone una subida del 26%, alcanzando en 2016 los 13.975 millones. Es especialmente relevante el crecimiento del pasivo exigible que es necesario devolver a largo plazo, con un incremento experimentado en ese periodo de 3.121 millones, que representa un aumento del 40%, hasta alcanzar 11.012 millones en 2016.

El ejercicio 2016 refleja una situación de desequilibrio a corto plazo, con un fondo de rotación o maniobra negativo que pone de manifiesto unas necesidades de financiación para atender sus obligaciones a corto plazo de 116 millones de euros, muy inferiores a los 824 millones necesarios en 2013. Consecuencia de ello es que la ratio de liquidez general haya mejorado, aunque esta magnitud se muestra estructuralmente negativa.

Tanto la liquidez inmediata como la necesaria a corto plazo han aumentado en el periodo. Además, el tiempo medio que se tarda en cobrar a los deudores y en pagar a los acreedores ordinarios se ha reducido ligeramente en este periodo, situándose en 2016 en los 48 y 59 días respectivamente.

Los indicadores financieros en materia de endeudamiento ponen de manifiesto el aumento de la dependencia de las entidades de crédito y/o de la emisión de deuda para obtener financiación, constituyendo el pasivo exigible más de las tres cuartas partes de la totalidad de sus recursos financieros. Ratificando lo anterior, la deuda por habitante se ha visto incrementada hasta los 5.710 euros en 2016.

Magnitudes e indicadores de la cuenta del resultado económico-patrimonial agregada. Los indicadores obtenidos mantienen los resultados constatados anteriormente, si bien en este caso ha de tenerse en cuenta especialmente la limitación al alcance del trabajo derivada de que dicho estado es agregado y no consolidado.

Los resultados del ejercicio (ingresos y beneficios menos gastos y pérdidas) son estructuralmente negativos en el periodo analizado. No obstante, la tendencia ha sido ligeramente favorable, ya que el desahorro se ha reducido un 3% en el periodo, situándose en -563 millones en 2016.

Los indicadores obtenidos derivados de los ingresos de la gestión ordinaria ponen de manifiesto que el índice de ingresos tributarios experimenta una tendencia estable y la ratio de transferencias y subvenciones una evolución levemente creciente. En relación a los gastos, la ratio referente a los de personal permanece estable. Lo mismo sucede con el indicador de transferencias y subvenciones entregadas, mientras que el resto de gastos de gestión ordinaria registra un leve descenso.